

Exigencias antiguas, esperanzas nuevas

ALAIN LIPIETZ *

A finales del siglo XX, el principal adversario de la ecología política, el obstáculo que cierra el camino hacia el desarrollo sostenible, que encona las tensiones sociales en el mundo entero y desgarró la sociedad humana entre ahitos y excluidos, no es cualquier forma de productivismo, ni siquiera de capitalismo. Es el modelo de desarrollo capitalista que, en los años ochenta, prometió un camino de salida a la crisis mediante la vuelta al liberalismo económico.

A primera vista los años ochenta representaron, en efecto, el triunfo del liberalismo económico: la fase más larga de crecimiento de los EEUU, el derrumbamiento del cadáver carcomido del «socialismo», la extinción de las

* Alain Lipietz es economista verdirrojo, investigador en el CEPREMAP (CNRS, Francia), portavoz y principal inspirador de la Comisión Económica del partido verde francés *Les Verts*, y Consejero Regional verde elegido por la región de Ile-de-France. Ha presentado reflexiones originales sobre economía, ecología y sociedad en numerosos ensayos, entre los cuales valdría la pena, a mi juicio, traducir y discutir a fondo *Choisir l'indépendance - Une alternative pour le XXI siècle* (La Découverte, París 1989). De su último libro, *Vert espérance - L'avenir de l'écologie politique* (La Découverte, París 1993), procedo el texto que aquí presentamos: se trata de una traducción de los capítulos 4 y 5 de la obra (el capítulo 5, en el libro, empieza en el párrafo titulado «Del 'socialismo' a la ecología»), agrupados bajo el título EXIGENCIAS ANTIGUAS, ESPERANZAS NUEVAS, que en el libro encabeza toda su primera parte (los cinco primeros capítulos). Construir un artículo de dos capítulos de un libro supone una mínima manipulación textual, sobradamente justificada, en mi opinión, por la oportunidad de presentar ante los lectores de lengua castellana a uno de los autores más interesantes del área verde-alternativa europea, por medio de un texto conciso, denso y sintético. Incluso sin compartir todos los aspectos de los análisis y propuestas de Lipietz, creo que introducir su voz en el actual debate sobre programas verdirrojos y alternativos es necesario. Salvo ésta, todas las notas restantes son de Lipietz. (N. del T.)

«vías originales» en el Tercer Mundo, la desaparición del marxismo, el exacerbamiento del egoísmo y el individualismo. Y sin embargo... 1990 volvió a poner los relojes en hora: recesión en EEUU y Gran Bretaña, hundimiento del dólar por debajo de la mitad de su valor de 1985 (en yenes o en marcos). Y pese a ello, un déficit comercial monstruoso que, desde hace más de siete años, asciende a casi 10.000 millones de dólares mensuales. Con el agua al cuello, los EEUU, ellos solos, superan la mitad de la deuda externa total del Tercer Mundo, mientras sus empresas caen una tras otra en la escarcela de países mejor «organizados», menos liberales, como Alemania y Japón. Para llegar a final de mes el gobierno estadounidense se ve obligado a alquilar su gigantesco ejército: la soldada por la guerra del Golfo asciende a 51.000 millones de dólares (medio año de déficit comercial) pagados por los jefes, Alemania y Japón. En el Tercer Mundo se hundieron los países que proclamaron el liberalismo (o bien se lo impuso el FMI) como Argentina y Perú, y triunfan los países proteccionistas, casi planificados (Corea del Sur, Taiwan). En las negociaciones del GATT (Ronda Uruguay) en Ginebra, en diciembre de 1990, fracasó la última intencional estadounidense de imponer el libre cambio en agricultura y servicios frente a la Comunidad Europea, Japón y Corea del Sur. Dos años más tarde, se está negociando sobre el reparto organizado de las cuotas de mercado... Y el nuevo presidente de EEUU, Bill Clinton, le da la espalda todavía más rotundamente al liberalismo que ha estragado su país.

El final del fordismo

Saltemos veinte años atrás. En el Norte triunfaba un modelo de desarrollo capitalista bautizado a menudo como «fordismo». Constaba de una *organización del trabajo* (el «taylorismo») que oponía entre sí a quienes decidían y planeaban, por una parte, y a quienes llevaban a cabo lo decidido por los primeros, suponiendo que los últimos eran pasivos y disciplinados; y combinaba esta organización del trabajo con un *pacto tripartito patronal/sindicatos/estado* para «redistribuir los beneficios del crecimiento» en el mercado interior. Este modelo, ciertamente poco liberal, ha entrado en crisis. Tanto por el lado de la organización del trabajo, cada vez menos eficaz, como por el lado del pacto tripartito, imposibilitado por la internacionalización de la producción y de los mercados.

La victoria ideológica y política del thatcherismo en Gran Bretaña (1979) y del reaganismo en EEUU (1981) traducían un cambio de fase mundial, confirmado por la cumbre de Venecia (1980), y después por la conversión —bastante inesperada— de la Francia de Mitterrand (1983); y evidenciaba también evoluciones nacionales de cada uno de esos países hacia el liberalismo econó-

mico. Un liberalismo que pretendía relanzar a todo gas la «producción por la producción»: un *liberal-productivismo*. Su fuerza dentro de la opinión pública se basaba esencialmente en la crisis de los antiguos compromisos. En cuanto respuesta a la crisis, sin embargo, tenía muchos puntos débiles.¹

Para empezar, no respondía en absoluto a la crisis de la organización del trabajo: sencillamente la ratificaba, y sacaba la conclusión de que «había que ser menos generosos» (que el fordismo) con los asalariados. En cuanto a la anarquía de la competencia internacional, lo único que hacía era adaptarse pasivamente a ella aconsejando a cada país que exportase lo más posible, *por consiguiente* que adoptase los salarios más bajos y la legislación social (y ambiental) más laxa que pudiera.

Las consecuencias de la aplicación del liberal-productivismo fueron harto claras. Vino la tercermundización, la «brasileización» de los países antes fordistas que eligieron este camino: polarización social, formación de guetos urbanos, retorno de las «pestes sociales» (droga, sida, racismo, etc. Las rebeliones con saqueo, forma social bien conocida en el Tercer Mundo, hicieron su aparición en EEUU, en Gran Bretaña, y a finales de los ochenta también en Francia, de Mantes-la-Jolie a Vaulx-en-Velin. Los EEUU, decimoquinto país del mundo según el índice de desarrollo humano de la ONU (que combina ingresos por habitante, esperanza de vida y niveles educativos), tienen a los directivos mejor pagados del mundo, justo por delante de Brasil y Argentina, mientras que el salario medio ha retrocedido a los niveles de 1962.

Sin embargo, se esbozó otra vía, radicalmente opuesta: cambiar los compromisos entre capital y trabajo, trocar la «movilización de los recursos humanos» en la adaptación de las nuevas tecnologías por garantías sociales acrecentadas, un alza del nivel de vida o incluso —en la RFA— la reducción del tiempo de trabajo. Es la vía mayoritariamente elegida por las empresas exportadoras de Japón, la RFA, el arco alpino (Suiza/Austria/Norte de Italia), Escandinavia. Esta segunda y diferente solución a la «crisis de la oferta» no daba respuesta, evidentemente, a la otra cuestión (los desórdenes en los mercados mundiales). Pero en el transcurso de los ochenta, y contra lo esperado, reveló ser más competitiva en los mercados mundiales. Son los obreros mejor pagados y más protegidos del mundo (alemanes, japoneses) quienes aseguran la victoria abrumadora de sus empleadores contra los competidores estadounidenses, británicos y franceses.

1. Sobre el fordismo, su crisis y las posibles salidas a ésta pueden consultarse mis obras *Mirages et miracles* (La Découverte, París 1985) y *Choisir l'audace* (La Découverte, París 1989).

Al Este y al Sur: triunfos y desastres del liberalismo

Tal es el sorprendente balance del liberalismo económico. Un balance en buena medida desconocido en los países menos desarrollados: los países «socialistas» y el resto del Tercer Mundo.

El «socialismo» no era más que una especie de capitalismo de estado, con un compromiso entre cuadros y asalariados bastante diferente del vigente en el fordismo. Allí el taylorismo nunca pudo funcionar normalmente (por incompetencia de la dirección e imposibilidad de la planificación), pero no obstante la rigidez de la relación salarial era todavía mayor que en el fordismo, y ello al precio de salarios bastante bajos. Era otro compromiso posible («ellos hacen como si nos pagaran y nosotros hacemos como si trabajáramos», decían los obreros polacos), y parecía protegido de la competencia del Oeste mediante el monopolio estatal del comercio exterior. El hundimiento del «socialismo» no ha supuesto la elección de ningún modelo alternativo. Se hubiera podido intentar una transición suave a la socialdemocracia clásica (taylorismo más derechos sociales). La mayoría de los dirigentes del Este se han entregado en cuerpo y alma al modelo thatcherista-reganiano: libremercado más flexibilización de la mano de obra. Como resultado: el hundimiento total de lo ya conquistado. Sólo les queda una esperanza: reemplazar a los países del Tercer Mundo en su papel de reserva de mano de obra ultraflexible y baratísima. Pero olvidan un pequeño detalle: incluso hoy, hay miles de millones de mujeres y de hombres, desde Marruecos al Asia Oriental, que tienen un nivel de vida bastante por debajo del que hay en Polonia o en Rusia; y entre ellos, centenares de millones son capaces de producir y de exportar mucho más eficazmente que los países de Europa oriental.

Pues la misma revolución tuvo lugar en el Sur en los años sesenta y ochenta. En el Sur, la política de industrialización inicial (la «sustitución de las importaciones»), propugnada desde los años cuarenta por la CEPAL² y por los intelectuales occidentales «tercermundistas», era una especie de combinación de sub-fordismo y de «socialismo»: barreras aduaneras, fuerte implicación económica del estado en sustitución de la inexistente clase empresarial, compromiso con una aristocracia obrera que servía como base a regímenes populistas.

Hacia finales de los años sesenta, en este modelo se combinaban las crisis del fordismo y del «socialismo». La ofensiva de los teóricos liberales —los *Chicago*

boys— en Chile y Argentina fue el laboratorio del neoliberalismo. Su victoria política es hoy destruidora en América Latina. En Bolivia, por ejemplo, asistimos a la destrucción de todos los antiguos compromisos, acompañada del discurso: «hiperinflación = indexación de los salarios = sindicalismo». Pero el resultado económico de esta victoria política es catastrófico: la regresión general de estos «nuevos países desindustrializados». Chile, paradójicamente, y a pesar de un endeudamiento tremendo, parece haber hallado un nuevo punto de equilibrio: se trata de la vuelta a la «vieja» especialización en la exportación de bienes primarios (hoy, además del cobre, los agrrios, las legumbres, la uva...). Los restos de la clase obrera nacida de cuarenta años de substitución de las importaciones viven a duras penas de chapuzas en los barrios de chabolas. Y sin embargo, la coalición democrática que ha reemplazado a Pinochet apenas se atreve a poner en entredicho esa dudosa «conquista»... en nombre del imperativo de la deuda externa, que parece justificar ese viejo / nuevo modelo exportador. Argentina, y hoy incluso Brasil, se lanzan a seguir los pasos de Chile en una fase de destrucción que de momento no tiene nada de creadora.

En Extremo Oriente, sin embargo, la trayectoria es muy diferente. La industrialización orientada a la exportación se apoyó al principio en los bajísimos salarios (de las mujeres en especial), pero también en una reforma agraria profunda y bien protegida (en Corea del Sur o Taiwan), y sobre todo en una planificación eficaz de los préstamos y de las importaciones de bienes de equipo. Y, dentro del Sur, estos son también los países «ganadores»... ¡y amenazadores para el Norte reaganiano o thatcheriano, el cual hoy tiene ya que protegerse con barreras arancelarias! Y Corea y Taiwan comienzan ya a poner en práctica los métodos «post-tayloristas» y a repartir los dividendos resultantes entre sus clases obreras...

El liberalismo no ha ganado ni en el Norte ni en el Sur. Pero ha tenido el éxito suficiente como para arruinar países enteros, tanto en el Norte como en el Sur. Y para desequilibrar la economía mundial de forma duradera.

Frente a él, algunos países se las han arreglado para probar que una forma de capitalismo más organizada, más concertada, que negocia a cambio de «ventajas» la implicación de los trabajadores en la batalla por la calidad y la productividad, y a menudo en vanguardia de la protección ambiental, se las apañaba mejor en la competencia intercapitalista. Pero ni siquiera esos países pueden nada contra los desórdenes económicos mundiales. Los dos primeros países según el índice de desarrollo humano de la ONU, Suiza y Japón, no han podido escapar a la recesión de 1991-93. Alemania no consigue digerir una reunificación consumada en contra del sentido común, que los Verdes

2. La Comisión Económica para América Latina es un organismo de la ONU que en aquella época desempeñó un papel muy importante en la elaboración de la doctrina en la que se fundamentó el éxito pasajero de esos países, que sirvió de modelo a muchos otros países independizados en la posguerra de la segunda guerra mundial.

alemanes criticaron en 1989.³ En definitiva, si estos países han probado que se *podían* hacer mejor las cosas que con el liberalismo, de ningún modo pueden servir como modelo de «desarrollo sostenibles» (y mucho menos Japón).

¿Qué defender entonces? Es lo que voy a esbozar en los apartados siguientes, en lo que concierne a la economía de un país como Francia.

Del «socialismo» a la ecología

Marx peleó su última batalla contra el primer movimiento socialista institucionalizado de forma duradera: el Partido Socialdemócrata alemán, arquétipo de todos los partidos de la Segunda Internacional, e incluso de los de la Tercera y la Cuarta. Su *Critica del programa de Gotinga* comienza con las palabras siguientes: «El trabajo *no es la fuente* de toda riqueza [como afirma el programa del Partido Socialdemócrata]. La *Naturaleza*, tanto como el trabajo, es fuente de valores de uso...»⁴

Seguramente, para el propio Marx, el alcance de esta crítica era bastante limitado. Para él la naturaleza era un factor de producción como los otros, que había que trascender socialmente, que «humanizar» (véanse sus *Manuscritos de 1844*), que en todo caso había que dominar de acuerdo con la gran tradición judeo-cristiana-cartesiana. Aun más: para él, la naturaleza era solamente una «fuente» (de materias primas, de energía), como lo seguirá siendo en el primer gran manifiesto «antiproduccionista» de los años setenta de nuestro siglo, el primer informe al Club de Roma *Los límites del crecimiento*. Hoy a los ecologistas les da mucho menos miedo el agotamiento de los recursos y llegan al problema fundamental: los límites de la naturaleza como «sumidero» (para nuestros desechos, basuras y subproductos) y como «lugar» para nuestras actividades, sencillamente. En cualquier caso, Marx identificaba uno de los dos ángulos muertos del socialismo: la existencia de un «medio ambiente» libre, gratuito para la humanidad, aunque apropiable privadamente (de ahí el interés de Marx por la renta de la tierra), un campo de expansión no reconstituible por medio del trabajo, pero necesario para la acumulación capitalista.⁵

3. Véase mi libro *Berlín, Bagdad, Río* (Quai Voltaire, París 1992).

4. La *Critica del programa de Gotinga* prosigue con la crítica de otro aspecto del «socialismo»: su estalinismo. Ahí Marx, por ejemplo, se pronuncia contra la estalinización de la escuela, y le habría sorprendido muchísimo la «guerra escolar» francesa de 1984. Pero esa es otra historia...

5. El otro ángulo muerto es el olvido de la sexuación de la humanidad, la negación de la opresión de las mujeres. En cuanto al primer ángulo muerto del «socialismo real», en realidad no era tal para el mismo Marx: véase el número 12 de la revista *Actual Marx* (monográfico titulado *L'écologie, ce matérialisme historique*).

Todo el «socialismo», en sus versiones socialdemócrata o estaliniana, se ha apoyado en esta ignorancia. El compromiso capital-trabajo (alíí el «capital») figuraba en la forma del Estado) se basó en esta negación, siendo la otra gran negación la opresión de las mujeres. La ecología política nació como oposición no sólo al liberalismo, que evidentemente compartía el mismo presupuesto y desde mucho antes, sino también a aquel tipo de «socialismo». En paralelo, el feminismo, a menudo aliado a la ecología política (o más bien: componente de la ecología política), ponía en entredicho la otra negación.

No obstante, en el centro de la ecología política no se halla el «medio ambiente». Lo que hay es una totalidad compleja, estructurada triangulamente: la especie humana, sus actividades y la naturaleza. La naturaleza, amenazada, transformada por la actividad humana, al mismo tiempo base y matriz de esta actividad. En este sentido, un soto, o un bosque de repoblación, o un barrio urbano, también un barrio de chabolas, ya constituyen «medio ambiente», por muy artificiales que sean. Las fuentes del compromiso ecologista pueden ser el amor por la humanidad, el amor por la naturaleza o el deseo de armonía, pero el *objetivo* de la ecología política sólo puede ser esa mediación decisiva entre el ser humano y la naturaleza: la actividad productiva, transformadora, consumidora de la humanidad. Vale decir la economía. Economía, ecología: casi la misma palabra. La primera habla de «medida» (*nomos*), la segunda de «sentido» (*logos*). La economía ecologista es una actividad mesurada y dotada de sentido.⁶

Para los ecologistas, tres valores fundamentales deberían orientar la actividad humana. El primero, evidentemente, es la *responsabilidad*, respecto a la naturaleza —es decir, las restantes especies vivas— y respecto a las generaciones futuras de las cuales tomamos prestado este mundo que les devolveremos transformado, para bien o para mal. Este valor constituye en cierto modo la «marca registrada» de la ecología, su contribución a la larga historia del progreso de la conciencia humana. Pero entre los valores más antiguos, heredados de los movimientos emancipatorios anteriores como el liberalismo político y el socialismo, la ecología política, tanto en Francia como en el mundo entero, privilegia particularmente otros dos: *autonomía* y *solidaridad*. Como aspiración a *soñorear* la actividad propia, a ver las consecuencias de los actos propios hasta el final, la *autonomía* se afianzó en los años que siguieron a Mayo del 68, nutrida por la herencia libertaria, frente a una economía demasiado centralizada y demasiado tecnocrática. ¿Y cómo sentirse responsable cuando uno mismo está excluido de los procesos de decisión

6. Lo que sigue es esencialmente un resumen de mi libro *Choisir l'indice*, ya citado. Igualmente se hallarán ciertos desarrollos ulteriores elaborados por la Comisión Económica de *Les Verts*, y presentados en el folleto *Les Verts et l'économie*.

económica? Pero, frente a la deriva individualista de muchos ex-sesentayochistas, los ecologistas han conservado en su corazón la exigencia de *solidaridad*. Pues, ¿cómo pretender preocuparse por las generaciones futuras si uno ignora a los excluidos y marginados del presente?

Tales ambiciones y exigencias unen a los nuevos movimientos sociales que desafían, desde hace un cuarto de siglo, al desorden establecido. Pero también atraviesan o tienen las evoluciones actuales del mundo sindical, e incluso las de los sectores más esclarecidos del mundo de los negocios.

Otra manera de trabajar

La economía ecologista es, antes que nada, otra manera de trabajar. Prioridad a las formas de actividad dominadas por pequeños grupos, en las comunidades urbanas o rurales, las asociaciones de barrio, las cooperativas... Pero sobre todo prioridad a una transformación de la relación salarial misma: la «movilización negociada de los recursos humanos», es decir de la inteligencia, la experiencia, la imaginación de los trabajadores, en el esfuerzo por la calidad de los productos, por la seguridad y la eficacia de la organización productiva. No la «individualización de los salarios según el mérito», sino, por el contrario, la cooperación organizada —y a veces conflictiva— de colectividades de trabajo.

Esta *implicación negociada* de los productores está en la base de todo. Mediante la reconquista del sentido del trabajo, mediante esta parcela de autonomía reconstruida en el nivel del taller o de la oficina, se reconstruirá el mantillo fértil de una ciudadanía ampliada no solamente en la empresa, sino respecto a todas las facetas de la vida social y de la responsabilidad ecológica. Sólo los productores que sepan cómo producen, y a quienes concierne la organización de su propio trabajo, podrán imponer procesos productivos sanos y seguros, no sólo para ellos sino para el medio ambiente, los clientes, los usuarios.

Este nuevo principio de organización probó su competitividad frente al taylorismo en los años ochenta, como vimos al principio de estas páginas. Pero no implica automáticamente la solidaridad: el ejemplo de las grandes empresas japonesas, o el de los asalariados de las ramas favorecidas en el

7. André Gorz, uno de los maestros de la ecología política en Francia, curiosamente ha abandonado esta exigencia en sus últimas obras, él que abogaba con tanta elocuencia por una estrategia obrera de este tipo frente al «neocapitalismo». En este punto, la mayoría de los militantes ecologistas franceses no le ha seguido.

Land alemán de Baden-Wurtemberg, evidencia los riesgos de que se constituya una «aristocracia asalariada» celosa de sus capacidades y sus privilegios, hostil a la solidaridad para con los asalariados de otras ramas o de las regiones desheredadas. El nivel de la negociación colectiva (más allá de la empresa: por ramas, en la sociedad entera) será decisivo, y por lo tanto lo será también la salud del movimiento sindical.

En un segundo momento, la economía ecologista es la elección —también negociada por una colectividad ilustrada en lo que toca a sus responsabilidades— de los productos de esta actividad. Demasiado a menudo la preocupación «ambiental» se presenta como un coste que grava el precio de los productos y —en el caso límite— amenaza el empleo. *Es todo lo contrario: el medio ambiente no cuesta nada*, y precisamente es por eso por lo que el productivismo lo despilfarra. La contaminación, la degradación de la biosfera: ¡estos son los costes que hay que eliminar! Esos costes hoy no los paga nadie, es decir, los pagamos todos. Hacer pagar esos costes no es imponer costes nuevos, sino simplemente hacerlos aparecer, y por consiguiente hacer que los paguen los contaminadores. De todas formas, si no lo hacemos así los pagarán las generaciones futuras, y las poblaciones expuestas a la contaminación los están pagando ya.

El cuidado del medio ambiente, la restauración o el perfeccionamiento de esta herencia que legaremos a las generaciones futuras, puede incluso convertirse en una de las principales salidas para la actividad económica, en lugar del sobreconsumo que constituyó el motor de los «Treinta Gloriosos». Así, en lugar de dejar tierra agrícola en barbecho (para satisfacer las exigencias de los EEUU) y de concentrar una agricultura «competitiva» en superficies cada vez más restringidas y cada vez más anegadas de pesticidas y abonos, una reforma razonable de la política agrícola común europea tendrá que apuntar a una agricultura lo más biológica posible, extensiva en tierras, poco consumidora de insumos químicos, pero intensiva en trabajo campesino especializado, orientada a la producción de alimentos sanos y sabrosos, destinados principalmente al mercado interior, y tendrá que apuntar también a la conservación de un paisaje armonioso y variado.

De la misma forma, a menudo resulta más económico realizar ahorros de energía que construir capacidades de producción nuevas (siempre peligrosas cuando se trata de electricidad nuclear, contaminantes cuando se trata de centrales térmicas, o devoradoras de espacio si se trata de energía hidráulica). Pero, en todos los casos, con gastos constantes, el ahorro de energía crea muchos más empleos que la producción de nueva energía en esas «megaherramientas» que son las centrales eléctricas y los grandes pantanos.

La economía ecologista, finalmente, es una norma nueva de distribución que mide el progreso de la «dicha de vivir». Por nuestros pagos, donde las necesidades básicas están garantizadas para la mayoría, la distribución de los incrementos de productividad debe seguir resueltamente dos direcciones prioritarias: la *lucha contra la exclusión* y el *crecimiento inmateral*, el crecimiento del tiempo libre. Por eso, la reducción del tiempo de trabajo está en el centro de la macroeconomía de los ecologistas.

La revolución del tiempo libre

Bajo el aspecto del «reparto del trabajo» es, de entrada, la primera expresión de la *solidaridad*. La izquierda gubernamental francesa, siguiendo modelos keynesianos o liberales, no ha sabido más que llevar hasta los tres millones de parados, con el séquito de sus desdichas: exclusión, guetos, delincuencia, racismo. Remendar una sociedad desgarrada es hoy la exigencia número uno, ocultada desde hace demasiados años por la espera de una mítica «reanudación del crecimiento». Ello es que tuvimos derecho a este reanudamiento entre 1985 y 1990: pero apenas consiguió hacer retroceder al paro, y la desaceleración siguiente lo hizo saltar hacia nuevas cimas. De hecho, sólo la reducción de la duración *individual* del trabajo, de acuerdo con la tendencia secular bloqueada desde hace diez años, podrá alajar su progreso. Proponemos las 35 horas semanales (en promedio) inmediatamente, y después una reducción continua que nos llevaría a las 30 horas a comienzos del siglo próximo.

Como es patente, esta concepción del reparto de trabajo no tiene nada que ver con el reparto del paro y la generalización de la precariedad laboral (en primer lugar, para las mujeres del sector terciario) que venden cierto número de políticos de izquierdas y de derechas bajo la etiqueta abusiva de «reparto del trabajo». Ese reparto del paro se contenta con generalizar los empleos a tiempo parcial y a salario también parcial: se trata de obligar, a personas que ya no consiguen arreglárselas con el salario mínimo, a resignarse a un semipreparo y un semisalario. No, yo aquí estoy hablando de una reducción de tiempo de trabajo normal por un salario normal (que permita, por ejemplo, vivir normalmente a una madre soltera).

Por otra parte, el reparto de trabajo no lo aceptará la mayoría de quienes tienen un empleo (pues, para ser eficaz, implica cierto reparto de los ingresos) más que si lo viven como *crecimiento del tiempo libre*, un tiempo libre revalorizado. Constituye un presupuesto para la *autonomía*: una sociedad de individuos libres es una sociedad de individuos que tienen tiempo libre. lo sabemos desde Aristóteles. Necesitamos tiempo libre para el ejercicio de la

vida cívica, para desarrollar nuestras actividades autónomas. Necesitamos tiempo libre para consumir lo que ya hemos comprado: para escuchar música, leer libros, hacer deporte o practicar la fotografía. Sobre todo, necesitamos tiempo libre para la amistad y el amor.

Una sociedad que mida el progreso por el crecimiento del tiempo libre más que por la acumulación de riquezas viene, en definitiva, exigida por la *responsabilidad*, puesto que la crisis de los residuos, el cambio climático inducido por el efecto invernadero, no son sino la consecuencia de un modelo de crecimiento indefinido del consumo masivo.

Semejantes opciones exigen nuevas *reglas del juego*. Una acción política para reglamentar, gravar con impuestos, prohibir las actividades nocivas, coordinar una reducción del tiempo de trabajo suficiente para crear empleo masivamente. Una acción diplomática, para imponer condiciones ecológicas y sociales al libre cambio y para evitar que todas aquellas lindas exigencias no resulten barridas por los juegos perversos de la competencia en el mercado mundial. Un esfuerzo inmenso de solidaridad con el Tercer Mundo, para evitarle verse obligado a serrar la rama del árbol donde se halla.

Volvamos al ejemplo de la reducción del tiempo de trabajo. Los Verdes europeos, igual que todas las fuerzas sindicales de Europa Occidental, han propuesto reducir inmediatamente la duración semanal del trabajo a 35 horas en promedio (y por otra parte los ecologistas están a favor de todas las formas de «reagrupamiento» voluntario del tiempo libre, a través de cierta anualización del descuento, e incluso con la posibilidad de años sabáticos). En Francia, esta medida crearía alrededor de un millón de puestos de trabajo al cabo de tres años, según los economistas.⁸ Podría compensarse salarialmente al 70% (eso quiere decir que las 35 horas se pagarían como si fueran 37 y 3/4) en promedio, sin poner en peligro la rentabilidad ni la competitividad de las empresas. ¿Por qué? Por un lado, porque se sabe que una reducción del 2% en la duración del trabajo no disminuye la cantidad de trabajo proporcionado por los trabajadores más que en un 1% (la mitad). Ello es así porque las últimas horas de trabajo son las menos productivas, también las más peligrosas, aquellas en las que se dan los accidentes de trabajo. Tal aceleración de la productividad provocada por la misma reducción del tiempo de trabajo explica que ésta no cree tantos puestos de trabajo como podría hacer pensar una simple regla de tres, sino sólo la mitad. Pero, como revancha, permite

8. Según los estudios preparatorios del Undécimo Plan, el paso a las 37 horas (una reducción de sólo dos horas), con reducción de las cotizaciones sociales para los salarios más bajos, generaría ya 650.000 empleos. En mi propuesta me baso en el estudio más antiguo, pero más detallado y prudente, de E. Raulu y otros, «Les voies étroites d'une stratégie pour l'emploi», *Economie et Statistiques* 156.

pagar una parte de las horas no trabajadas. Por otro lado, la vuelta al empleo de un millón de parados disminuiría la masa de gasto social y aumentaría la base cotizante... a condición de que todas las empresas hicieran lo mismo. El «coste indirecto» del paro podría restituirse parcialmente al salario directo... si la reducción de la duración del trabajo es masiva.

Por consiguiente, una reducción masiva de la duración del trabajo, con compensación salarial parcial, sólo es posible si la ley (o los convenios colectivos interprofesionales, en los países donde impera esa tradición) da la señal para todos. Es la condición *absoluta* para que las empresas que se comprometan en la reducción del tiempo de trabajo estén seguras de que sus competidoras harán lo mismo; es la condición para que la caída del paro sea lo bastante masiva y previsible como para que puedan disminuir las cotizaciones sociales. Tal resultado elemental de la teoría de juegos de estrategia lo echaban en saco roto quienes, desde 1982, llaman a la «reducción negociada empresa por empresa». Los resultados saltan hoy a la vista: ¡cada empresa-rito, desde 1982, espera a que empiece el otro!

La coordinación mediante ley no excluye, por otra parte, que se negocien a nivel de empresa las *modificaciones* de adaptación, según un registro de vencimientos que fije un volumen de horas extras autorizadas de forma transitoria.⁹ La ley ha de fijar los horizontes colectivos necesarios para las adaptaciones particulares.

Para hacer bien las cosas una reducción semejante debería incluso coordinarse en el nivel macroeconómico real, es decir, el europeo (pero el adelanto alemán no lo hace necesario: los asalariados alemanes trabajan ya 100 horas menos cada año que los franceses, y muchos llegarán a las 35 horas semanales en 1994). El Grupo Verde en el Parlamento Europeo pelca en este sentido desde hace años... Pero el Acta Única y después el Tratado de Maastricht han eliminado concienzudamente la cuestión social del campo democrático europeo. De ahí la oposición de los Verdes, en nombre de la Europa social, a acuerdos que privilegian la libertad de los capitales y organizan la trágica rivalidad de los trabajadores. De igual modo, esos acuerdos han apartado el desarrollo sostenible del campo de la CE, favoreciendo así a los países de normas más laxas.

9. Si una mayoría que incluyera a los ecologistas llegase al poder debería fijar la duración legal del trabajo en 35 horas semanales, autorizando un volumen dado de horas extras pero sobrepagadas (por ejemplo al 100%). Ese sobrepago aumentaría con el tiempo (por ejemplo 200% al segundo año, etc). De este modo las empresas no se verían «atropelladas», sino que dispondrían de un plazo cada vez más costoso para adaptarse negociando. A continuación, el reparto de los incrementos de productividad en forma de tiempo libre debería convertirse en norma, para llegar a las treinta horas a comienzos del siglo próximo.

Finalmente, la compensación salarial de las horas no trabajadas no debería ser uniforme, puesto que ya es lo suficientemente duro vivir con el salario mínimo en zona urbana. Los Verdes proponen, en el marco de la compensación salarial al 70% evocada más arriba, el mantenimiento íntegro del salario hasta el nivel del salario mediano (algo menos del doble del salario mínimo) y una no-compensación progresiva (por tanto, sin efecto de umbral) por encima de éste. Semejante «convergencia» podría obtenerse por medio de la negociación colectiva, elevando el salario mínimo por hora, o por la vía de la fiscalidad: los Verdes proponen una tasa sobre los salarios modulada por la amplitud del abanico salarial de la empresa (de forma que pagarían más las empresas con un abanico salarial mayor). Se trata de una sugerencia entre otras posibles, lo esencial es el resultado: un retorno a un abanico salarial más estrecho, como es el caso en Alemania, como lo era en Francia... en 1982, antes de que diez años de socialismo en el gobierno no aumentasen las desigualdades.

Combatir el paro en frentes múltiples

Ya lo he dicho: las 35 horas son primordialmente un arma anti-desempleo, anti-exclusión. Pero eso no resolvería, en Francia, más que una tercera parte del problema (un millón de parados de los tres existentes). Dado que la reducción del tiempo de trabajo solamente es eficaz cuando la compañía cierto reparto de los ingresos, la prudencia aconseja no plantear de una sola vez objetivos demasiado ambiciosos (como «las treinta horas de inmediato»), que además chocarían con la dificultad de poner a trabajar inmediatamente a tres millones de parados.

Por tanto, hay que prever también otras soluciones. En lo que toca al paro *no existe ninguna panacea*: es menester multiplicar los ángulos de ataque. De camino ya nos hemos topado con otra vía: la elección de técnicas más intensivas en trabajo (en la agricultura o la energía, por ejemplo) pero menos deprecadoras del medio ambiente, y el desarrollo de las actividades ecológicas (restauración de parajes naturales, reciclado de materias primas, etc). Como se ve, los ecologistas no están contra todo crecimiento de la actividad económica, sino contra el crecimiento insostenible.

Ello nos lleva a la «cuestión insoslayable del relanzamiento». En efecto, ¿por qué no volver a la vieja estrategia de pleno empleo de los años sesenta: suscitar un relanzamiento de la actividad económica mediante una política de grandes obras públicas, con el objetivo de generar puestos de trabajo? Desde mi primer libro sobre las políticas económicas de la izquierda,¹⁰ y en

10. *L'induce ou l'enlèvement*, La Découverte, Paris 1984.

todas mis intervenciones a partir de entonces, abogo efectivamente por cierto tipo de relanzamiento, un «relanzamiento selectivo». Pero hay que examinar con cuidado sus condiciones y sus objetivos.

En primer lugar, una restricción doble se opone al relanzamiento: la falta de dinero para invertir (en las tesorías de las empresas y en las de los poderes públicos), y la «constricción exterior», vale decir la dificultad de equilibrar la balanza comercial de Francia. La primera construcción nos obliga a seleccionar con rigor los sectores del relanzamiento (aquellos donde se cree más empleo por cada franco invertido), la segunda nos remite al problema de la competitividad de las mercancías francesas. Este último punto, a su vez, nos lleva al debate sobre el «franco fuerte».

Desde el famoso giro de 1983, cuando el gobierno socialista eligió sacrificar su política social en el altar del franco fuerte, vengo pidiendo una devaluación de la moneda y choco con la ironía de los «expertos» que nos han llevado hasta los tres millones de parados. Su argumentación: un franco sobrevalorado en relación con las monedas de los competidores obligará a las empresas a contener los precios, a multiplicar los esfuerzos de productividad, de forma que alcancen competitividad sobre un fundamento sancado. Es la «desinflación competitiva».

En 1991-92 esta estrategia pareció al fin tener éxito, no en lo que hace al empleo, pero por lo menos en cuanto a la balanza comercial, que volvió a ser excedentaria. Pero un examen detenido de los hechos confirma, por el contrario, los peligros de una moneda sobrevalorada. Si los productos franceses volvieron a ser competitivos provisionalmente es porque nuestros vecinos practicaban también una política poco razonable de sobrevaloración. Italia, España, Gran Bretaña, con más inflación que Francia, se aferraban a una paridad demasiado elevada, y Alemania está financiando su unificación por medio de la inflación. Pero desde septiembre de 1992 eso se acabó: Italia, España y Gran Bretaña han devaluado, Alemania se ahoga en el estancamiento económico. Los mercados de los competidores de Francia van a contraerse mientras que sus exportaciones se volverán más competitivas.

Una política del franco sobrevalorado (como la actual) es una política de subvención a las importaciones, una política que penaliza las exportaciones. Pero todavía: como el franco se ve atacado permanentemente (ya que está sobrevalorado), hay que mantener una política de tipos de interés elevados para «recompensar» a los extranjeros que consienten en conservar francos. Tal política, a su vez, pesa sobre la capacidad de financiar las inversiones, en particular las de intención ecológica (ahorro de energía, transportes colectivos) y social (vivienda).

Con un sentimiento de amarga ironía oigo, tanto a derecha como a izquierda, las voces ayer ortodoxas que hoy piden el relanzamiento... y la devaluación. Algunos se apoyan incluso en los trabajos recientes de economistas próximos a Bill Clinton, que, bajo la rúbrica de «crecimiento endógeno», redescubren el Mediterráneo al que ya había llegado Roosevelt antes de la segunda guerra mundial: hay que gastar dinero en las grandes obras de infraestructura que generan empleo a corto plazo al mismo tiempo que reordenan el territorio. Santa ignorancia, ¡pues claro que sí!

Pero que no nos impongan nuevos elefantes blancos devoradores de espacio y de capitales. Restaurar, reconstruir si hace falta el parque de viviendas sociales, reedificar ciudades donde sea placentero vivir, con pisos insonorizados y aislados térmicamente, muy bien. Impulsar los transportes colectivos, brazos y aislados térmicamente imponernos una plétora de autopistas medio vu. Pero que no pretendan imitar el canal Rin-Ródano tan inútil como desastroso para la región del Jura... Un relanzamiento mediante la construcción y las obras públicas es muy eficaz en creación de empleo y muy austero en importaciones. ¡Pero no hay que relajar la selectividad ecológica y financiera en la determinación de estas obras!

En definitiva, no soñemos despiertos. El paro no disminuirá de un día para otro. Reducirlo a la mitad en una legislación ya sería una hazaña. Queda un último frente por manejar: la reinserción social de los parados a los que no podrá reintegrar al trabajo la economía mercantil. Es la oportunidad para un «tercer sector» (al lado del sector privado y de la función pública). Un sector de cooperativas, asociaciones de intermediación, empresas de inscripción, subvencionado permanentemente (igual que lo están los parados) y libre de impuestos y de cotizaciones sociales (como lo están los parados), que por tanto no costará ni un céntimo más a la colectividad, pero podrá proporcionarle servicios a precios muy bajos, remunerando al mismo tiempo a sus trabajadores con ingresos normales y una protección social normal. Un sector de utilidad social consagrado a ciertas labores de ayuda a los particulares y de restauración del medio ambiente, autogestionado, y que trabaje relaciones contractuales con los usuarios. En pocas palabras: pagar como Dios manda a los excluidos para que hagan cosas útiles y puedan así recobrar el reconocimiento social, en lugar de mantenerles en una condición de asistencia pública.

Un sector así podría acabar ocupando a un millón de personas permanentemente. Más que de una reforma (necesaria) de la protección social de los parados por parte del Estado (como el Ingreso Mínimo de Inserción), se trata de pasar del Estado-providencia al municipio-providencia...

Por una reforma fiscal

Ya nos hemos referido incidentalmente al uso que los ecologistas hacen de la fiscalidad. Un uso incitativo, destinado a promover nuevos comportamientos, y no solamente para bombear recursos financieros. Es cierto que «impuesto bueno es impuesto viejo». Pero los impuestos demasiado viejos en las condiciones nuevas, frente a exigencias nuevas, producen resultados absurdos (pensemos en los efectos perversos de las «cuatro viejas» tasas locales, en el marco de la descentralización: cuanto más rico es un municipio menos carga fiscal debe imponer a sus empresas y habitantes... y viceversa).

De manera que los Verdes son partidarios de profundas reformas fiscales. La más inesperada, y la más criticada, es la *supresión del impuesto sobre los beneficios de las empresas*. ¡Hasta ahí podíamos llegar! ¿Como? Pues sí. ¿Por qué sancionar la eficacia económica de la empresa en cuanto tal? Las rentas del capital, *es decir de sus propietarios*, deben contribuir a las necesidades colectivas mediante una exacción en el nivel del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), sin exoneraciones de ningún tipo. Eso no quiere decir que las empresas pagaran muchos menos impuestos, sino que pagarán impuestos más «inteligentes», que las inciten a comportamientos más ecológicos. La «ecotasa» sobre el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono, que se negocia en Bruselas para luchar contra el efecto invernadero (y que supondría diez dólares por equivalente de barril de petróleo), recuperará la mayor parte de lo que se suprime en el impuesto sobre los beneficios.

Todavía más profunda ha de ser la reforma de las exacciones sobre los ingresos personales. Actualmente, en Francia, son particularmente injustas. La mayor parte de ellas, las cotizaciones sociales, sólo gravan los salarios. A continuación está el IVA, que grava todos los gastos finales, tanto los de los ricos como los de los pobres, tanto las rentas del capital como las del trabajo. A menudo se considera al IVA un impuesto injusto, y es cierto que resulta menos progresivo que el IRPF. Pero es mucho más justo que las cotizaciones sociales, ya que resulta de una exacción sobre *todos* los ingresos en el momento del consumo. Es verdad que la parte de los ingresos asignada al consumo decrece con el nivel de renta, pero eso puede compensarse modulando el IVA, fijando un tipo de IVA más elevado para los consumos de lujo o perjudiciales para el medio ambiente. Finalmente está el más pequeño, el IRPF, muy progresivo (ello quiere decir que el tipo del impuesto crece con los ingresos), pero deformado por tremendas exoneraciones para las rentas del capital.

Los Verdes proponen trasladar (progresivamente) toda la financiación de los subsidios familiares (subsidio de paro, de maternidad, etc) al IRPF, y toda la

financiación de la sanidad pública al IVA. Sólo las cotizaciones de jubilación seguirán basándose en los salarios, ya que los cotizantes tienen así la impresión de estar ahorrando para ellos mismos en el futuro. Por otra parte hay que observar que la proporción de las cotizaciones de jubilación seguirá aumentando indefinidamente: cuando se vive más tiempo y se trabaja menos, resulta inevitable que una parte creciente del salario de las horas trabajadas se utilice para financiar los años de descanso...

El efecto redistributivo de una reforma semejante será enorme, en beneficio de los asalariados ya que las otras rentas gravadas (en particular las rentas del capital) cotizarán mucho más que antes. Y en tal caso, ¿por qué no basarlo todo en el IRPF? Porque sería «sobrecargar la barca», incluso si se hiciera a lo largo de toda una legislatura. Nuestra propuesta implica ya duplicar el IRPF y aumentar fuertemente el peso del IVA.

Estos traslados no afectarán al nivel general de precios y, si la exacción del impuesto en fuente se generaliza, los contribuyentes apenas lo notarán. Las empresas pagarán a Hacienda, que pagará a su vez a las tesorerías de la Seguridad Social, una parte de lo que antes pagaban directamente a la Seguridad Social. El incremento del IVA no plantea ningún problema en el marco del Mercado Común, ya que es un impuesto que se deduce en las fronteras, y seguirá siéndolo al menos hasta 1996, ya que la armonización de los tipos impositivos en Europa está lejos de haberse realizado. Tal es incluso la razón de que se inventara el IVA, y supone una gran ventaja: es un impuesto que no pagan los compradores de productos exportados. En 1996, cuando vuelva a hablarse de la unificación del IVA a nivel de la CE, este modelo podrá adoptarlo el conjunto de la CE, ya que Europa necesitará defenderse de la competencia de los países sin seguridad social.

Cambiar de escala

Lo advertimos otra vez: el progreso social y ecológico sólo es verdaderamente posible a condición de que el espacio de la fiscalidad, de los convenios colectivos, de la legislación, vuelva a coincidir con el espacio de la actividad económica. Hoy, la «globalización» es el manjar preferido de los conservadores. «No podemos hacer nada, el mercado mundial impone su ley, todo escapa de nuestras manos». La ecología política combate esa capitulación, de dos formas distintas:

- Reduciendo la escala geográfica de los circuitos económicos. Los Verdes son partidarios de fomentar los acuerdos intrarregionales, los «circuitos cortos» entre productores y consumidores, gracias a convenios negociados con

los distribuidores. Son partidarios de gravar impositivamente el transporte de mercancías a larga distancia, etc.

– Sobre todo, ampliando la escala de la democracia. Dando a Europa las dimensiones ecológicas y sociales que le faltan. Reforzando o creando las instancias reguladoras transnacionales capaces de imponer condiciones ecológicas y sociales al librecambio.

Esa es la pelea de los Verdes en el Parlamento Europeo, ignorada por desgracia en el Tratado de Maastricht, que cortocircuita la democracia a escala europea.

Pero semejante regresión no es ineluctable. Está en marcha una nueva revolución económica, todavía más importante que la que el keynesianismo y la socialdemocracia impulsieron al capitalismo hace cincuenta años, tan importante sin duda como el movimiento de los cercamientos que repartió, a finales de la Edad Media, los campos comunales entre granjeros eficientes. El conservadurismo de los defensores del antiguo modelo productivista acaso desemboque en una «guerra del medio ambiente». Para los ecologistas, la revolución del siglo XXI ha de desembocar en un modelo económico sostenible para la naturaleza, por ser solidario entre los seres humanos.

(Traducción de Jorge Riechmann.)